



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA**

Popayán, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

**Magistrado Ponente:** JAIRO RESTREPO CÁCERES

**Expediente:** 19001 33 33 008 2021 00096 01

**Demandante:** MARISELA SOTO Y OTROS

**Demandado:** NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Y OTROS

**Medio de control:** REPARACIÓN DIRECTA

**Auto Interlocutorio No. 074**

Pasa a Despacho<sup>1</sup> el presente asunto, para estudiar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, en contra del Auto Interlocutorio No. 817 dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán en el trámite de la audiencia inicial que tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2024, específicamente en la negativa de acceder a la declaración de parte de los accionantes.

Dentro del asunto *sub judice*, la parte demandante actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa instaurado en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional- y Municipio de Miranda, solicitó la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas con ocasión de las lesiones psicofísicas que aduce se produjeron a la parte actora en los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2019 en el municipio de Miranda, cuando explotó una moto bomba.

**1. El auto impugnado**

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante Auto Interlocutorio No.817 dictado en el trámite de la audiencia inicial que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024, entre otras cosas, decidió negar la solicitud probatoria presentada por la parte accionante de decretar el interrogatorio de parte de los accionantes, indicando entre otras cosas, que:

“A PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA:  
(...)”

- *Se niega el interrogatorio de parte de los accionantes, en atención a que el objeto de este medio de prueba es lograr la confesión de la contraparte; siendo en esta ocasión la misma parte quien solicita la prueba. Tampoco se adecuará a declaración de parte, habida cuenta que el objeto de este medio de prueba es proveer al juzgador de una visión más cercana de los hechos de la demanda, que en este caso se encuentran relatados con suficiencia en el escrito de la demanda.*  
(...)”

A PETICIÓN DE LA PREVISORA S.A.

- *Se decreta interrogatorio de parte de los accionantes: MARISELA SOTO, JOSÉ RAÚL*

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo normado en el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 125 del C.P.A.C.A., concordado con el numeral 7 del artículo 243 Ibidem, esta no es una decisión que deba adoptarse en Sala.

Expediente:  
Demandante:  
Demandado:  
Medio de control:

19001 33 33 008 2021 00096 01  
MARISELA SOTO Y OTROS  
NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Y OTROS  
REPARACIÓN DIRECTA

PARRA MURILLO, CLAUDIA JOHANA POSSO MEJÍA, SANDRA PATRICIA MAYA MARTÍNEZ, YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU Y SORAYDA CANDELO CAPOTE. “

## 2. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión del juez de instancia, el apoderado de la parte demandante formuló recurso de apelación en punto de la negativa del medio probatorio de la declaración de parte, exponiendo los siguientes argumentos:

*“Analizando un tema de procedencia de la prueba y que no ha sido un tema pacífico ni a nivel de jueces ni de Tribunales y mucho menos a nivel del Consejo de Estado. Y si pido que sea esta la oportunidad para que el Tribunal del Cauca adopte una posición unánime en el sentido de la lectura y procedencia de este tipo de medios de prueba, partiendo de lo siguiente. Efectivamente el código de procedimiento civil artículo 203 contemplaba que solo era posible pedir el interrogatorio de la contraparte, es decir, o demandante citaba a demandado, o extremo pasivo citaba a extremo activo.*

*Con la nueva redacción del código General del proceso me refiero al artículo 198 de esa Ley 1564 del año 2012, vemos que esta restricción desapareció, es decir, ya no se condiciona a que tenga que ser citada por la parte contraria. Y es que, haciendo una lectura o una interpretación desde el punto de vista que exegético, desde el punto de vista literal o gramatical, vemos que si esa condición no existe, no sería dable al operador, en este caso el juzgador, hacer la distinción y este que tenemos que acudir a un principio de interpretación jurídica es donde la ley no distingue, no les dable al operador eso a una mirada, una simple lectura, le repito desde el punto de vista literal, desde el punto de vista exegético o gramatical se suma además que con la entrada.*

*De las codificaciones de los procesos orales la dinámica ha cambiado y era entendible en su momento con los sistemas escriturales que el Código de procedimiento civil trajera esta previsión, pero con el Código General del proceso y la entrada de la oralidad, no solo a la jurisdicción civil, sino también a la contención, a lo laboral y la Penal que es de vieja data, pues se supone que la dinámica lo que pretende es generar mayores posibilidades para el juez de lograr la verdad real. Y es que esa es la finalidad del proceso y esa nueva dinámica implica un catálogo más amplio de medios probatorios y no tienen las restricciones con tanta formalidad que teníamos con las codificaciones anteriores.*

*Le sumo a esto que, si se quiere mirar esta norma, este artículo 198 bajo un criterio de interpretación constitucional, tenemos que lo que se contempla es una posibilidad, el derecho a probar como una arista del debido proceso y ese derecho a probar me permite a mí al llegar cualquier medio que consideremos idóneo, que consideremos conducente, necesario y útil para demostrar los supuestos fácticos que se alega. Entre otras, valía la pena, señora juez, que si acudimos también a un criterio sistemático de este artículo 198, vemos que la citación de mi propia parte no está provocando per se la confesión, lo que se pretende es cumplir con una carga y que es de vieja data. Y la carga dinámica de las pruebas y es que tengo que probar los supuestos fácticos que alegó el hecho de citar a mi demandante, y no significa que vaya a obtener el éxito a mis pretensiones, toda vez que con la declaración de esta de esta persona también se podrían dar por probado alguno de los argumentos defensivos del extremo procesal pasivo. Entonces, no se podría pensar a priori que con la citación de la propia parte se pretenda una confesión de la parte contraria o como lo han sostenido algunos jueces que resulte tautológico, es decir, repetir simplemente lo que está en la demanda no es esa la dinámica de los medios de prueba bajo las codificaciones existentes y que incorporaron la oralidad como sistema procesal.*

*El segundo aspecto que analizar todo, pues, es el tema de conducencia, pertinencia de utilidad para efectos de saber si le resulta o no procedente el decreto de la prueba. Y frente a esto tenemos que la situación de los demandantes*

se suma a la de los declarantes para demostrar supuestos fácticos en la que se nos explique los antecedentes del atentado del 26 de marzo de 2019 como las circunstancias mismas en la que este se desenvolvió. Por lo tanto, esa condición de conducencia está supremamente palpable y viable, para efecto del decreto de lo mismo. Si se quiere alegar también el tema impertinencia, inutilidad, vemos que con la citación de estos 6 demandantes, lo que queremos es demostrar un supuesto que tiene una relación directa con el planteamiento del problema jurídico, que usted haya hecho y si es que efectivamente se presentó el atentado en inmediaciones de las instalaciones, si hubo algún tipo de falla, como se alega en la demanda y por lo tanto aquí en este caso reitero señora juez, la pertinencia también sobra, es supremamente clara, para efecto del decreto de interrogatorio, de la prueba, y no podemos dejar de lado la utilidad de lo mismo en este momento no se ha recaudado ni un solo testimonio y lo que se ha hecho es simplemente es realizar el decreto, pero no se ha surtido la práctica y recordemos que la utilidad tiene que ver precisamente con si ya tenemos o no probado alguno de los supuestos fácticos que se alegan por los extremos procesales. En este momento no tenemos ninguna prueba incorporada que nos permitan demostrar los supuestos que relacionamos para efectos de la prueba que se ha instalado. Entonces solo tenemos 3 testimonios decretados, pero no practicados, y por eso sumamos, para efectos de que usted tenga mejores elementos de saber si existe o no la responsable, que estamos alegrando frente a las 2 instituciones públicas vinculadas a este proceso.

En ese sentido, señora juez, pidió al tribunal revocar la decisión, ordenar el interrogatorio de parte y hacer un llamado, respetuoso a tratar de unificar estos criterios, porque creo que no ha sido un tema pacífico desde hace más de 10 años a nivel de jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contenciosa también ha sido igualmente bastante discutido, si existe no la procedencia de este medio de prueba no solo ha analizado desde los elementos de conducencia utilidad y pertinencia, sino si efectivamente yo puedo llamar a mi propia parte. En este sentido, hay (...) no digo que precedente porque los Tribunales no generan precedente técnicamente hablando, pero sí existe un antecedente del doctor Carlos Leonel Buitrago, dentro de un expediente con radicado 2019 0019. Demandante, Clarissa Castañeda Serna. En este momento no tengo presente, El Juzgado de origen disculpe el juzgado sexto Administrativo no tengo presente los códigos, el código completo del proceso, el radicado completo, pero en él dejó sentado el doctor Buitrago que, efectivamente argumentos como los que acabo de exponer son suficientes para declarar la procedencia de este interrogatorio de parte. Efectivamente, no lo podemos desconocer, existen también otros integrantes del Tribunal contencioso administrativo del Cauca que piensan en sentido contrario. Esto es, la improcedencia a este medio de prueba.

Entonces, lo ideal es que se pueden ir adoptando criterios unánimes por la jurisdicción contenciosa, más allá de las posiciones del Consejo de Estado, que tampoco ha logrado uniformidad, porque existe un antecedente en donde se refiere que, efectivamente, la norma consagra la misma filosofía del Código de procedimiento civil Y es que no puedo citar a mi propia parte para declarar, pero también existe otra posición de otra sección en la que se sostiene que sí resulta viable el decreto de esta prueba a instancia de la misma parte. En ese sentido, dejó sentado mis inconformidades pidiendo primero aclarar el tema de la orden de prácticas del del examen pericial por cuenta de la junta regional y segundo por conceder el recurso frente a la denegación de la práctica de interrogatorio de parte (...)"

### III. CONSIDERACIONES

#### 3.1 El caso concreto

Para resolver se considera importante traer a colación el artículo 211 del C.P.A.C.A. el cual estableció que en aquellos procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que no esté expresamente regulado por esta norma, se aplicará en materia probatoria la normatividad procesal civil.

Teniendo en cuenta que no existe regulación en el C.P.A.C.A., para el punto atinente a la declaración de parte, se tiene que es procedente la aplicación del Código General del Proceso, en cuyos artículos 198 y siguientes, desarrolla el tópico en mención, en los siguientes términos:

**"ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES.** El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

*Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.*

*Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente.*

*(...)."*

Adicionalmente, el Código General del Proceso, también otorgó facultades al operador judicial con el fin de decidir, de acuerdo con sus miramientos, si las pruebas reunían o no los requisitos para la procedencia y en consecuencia ordenar su práctica:

*"Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará mediante providencia motivada, **las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.**"*

De ese modo, puede sostenerse, sin vacilación alguna, que el derecho probatorio colombiano se rige por el principio de libertad; sin embargo, ello no significa que todas las pruebas solicitadas por las partes deban ser decretadas, como quiera que la ley establece que solo serán procedentes aquellas que sean lícitas, pertinentes, conducentes y necesarias. No de otra manera se explica que el artículo 168 del Código General del Proceso disponga, se itera, que se rechazarán de plano los medios de convicción que no cumplan con las citadas características.

Una prueba se reputará **lícita** cuando es obtenida con respeto al debido proceso y a los derechos de las partes, elemento que es de suma importancia puesto que su origen se encuentra en la propia Carta Política, en cuyo artículo 29 se sanciona la prueba ilícita como "*nula de pleno de derecho*".

Por su parte, la **pertinencia** se refiere a que la prueba debe tener conexión directa con el problema jurídico a resolver<sup>2</sup>. A su turno, la doctrina define la **conducencia** como la característica que hace que los medios sean aptos o idóneos para probar o establecer determinada circunstancia fáctica<sup>3</sup>, en tanto la **utilidad** atañe "*al poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva*"<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Código General del Proceso: Pruebas*, Dupre Editores, Bogotá, 2017, Pág. 108.

<sup>3</sup> LÓPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 110.

<sup>4</sup> LÓPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 112.

Además, la solicitud probatoria debe satisfacer los requisitos mínimos que la ley contempló en relación con cada uno de los medios de convicción, tal y como puede examinarse con detalle en los distintos artículos del Código General del Proceso que regulan la materia.

Por ello, para que el juez pueda proceder al decreto de una prueba aquella no solo deber ser solicitada en la oportunidad que la norma reservó para ello, sino también debe ser lícita, conducente, pertinente y útil. Adicionalmente, quien formula la petición probatoria deberá cumplir con las exigencias propias del medio de convicción solicitado, de manera que solo en esos eventos será posible acceder al decreto de pruebas.

Ahora, cabe recordar que los medios probatorios propuestos deben cumplir los requisitos legales, al respecto en sentencia del Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa señaló:

*“Lo primero que conviene decir es que, por esencia, la prueba judicial es un medio procesal que permite llevarle al juez el convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso y, por ende, le permite tomar una decisión fundada en la realidad fáctica. Eso es lo que significa que la decisión judicial deba fundarse en las pruebas oportunamente aportadas al proceso.*

*Para la admisión de las pruebas, la práctica y los criterios de valoración deben observarse las normas del Código de Procedimiento Civil, conforme lo establece el artículo 168 del Decreto 01 de 1984 y algunas otras reglas propias del proceso en el que se decreten.*

*Las disposiciones del C.P.C. sobre el régimen probatorio indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.*

*Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos legales, esto es, con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad.*

*La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho.*

*La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio.*

*La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra. Finalmente, las pruebas, además de tener las características mencionadas, deben estar permitidas por la ley”<sup>5</sup>*

Aunado lo anterior, respecto al interrogatorio de parte, la Sección Tercera; Subsección C, del Consejo de Estado; con providencia del Magistrado Guillermo Sánchez Luque, de 04 de abril de 2022 señaló lo siguiente:

*“A diferencia de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo 198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. **Esta norma no faculta a las partes a***

---

<sup>5</sup> Sentencia nº 25000-23-27-000-2010-00162-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 7 de febrero de 2013,

Expediente:  
Demandante:  
Demandado:  
Medio de control:

19001 33 33 008 2021 00096 01  
MARISELA SOTO Y OTROS  
NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Y OTROS  
REPARACIÓN DIRECTA

**solicitar su propia declaración. El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes, bien sea porque de oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita. Son dos puntos de partida distintos.** Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden solicitar la citación de la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la citación de las partes. Esta norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de las partes ordenado por el juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda, no tiene una contraparte en el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo. **De ahí que, permitir que la misma parte solicite su declaración, no tiene en cuenta lo previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a una interpretación armónica de esta norma (artículo 30 CC).**

Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, **la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes.** De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua.

Según lo expuesto, la negativa de la A quo de acceder al interrogatorio de parte solicitada por la parte actora resulta ajustada, dado que la prueba carece de utilidad, pues teniendo en consideración que el interrogatorio fue solicitado por la misma parte demandante, se tiene que dicha situación riñe con la naturaleza misma de este medio de prueba, en la medida que está instituido para buscar una confesión del interrogado, esto es que produzca consecuencias adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria de conformidad con el numeral 3 del artículo 191 C.G.P

Asimismo, el capítulo III del título único de pruebas de la norma, intitula a este medio de prueba como “declaración de parte y confesión”, siendo indisolubles la conexión entre ambos.

Por lo expuesto, el Despacho comparte las apreciaciones del A quo en el auto acusado y destaca que los argumentos expuestos en el recurso de alzada no enervan las elucubraciones realizadas en primera instancia.

Con fundamento en las premisas descritas, se procederá a confirmar el Auto Interlocutorio No. 817 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, en el trámite de la audiencia inicial que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024, en lo relacionado a la negativa de acceder al interrogatorio de parte solicitada por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, **SE DISPONE:**

**PRIMERO.- CONFIRMAR** el Auto Interlocutorio No. 817 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, en el trámite de la audiencia inicial que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024, respecto a la negativa de acceder al interrogatorio de parte solicitada por la parte demandante.

**SEGUNDO.-** En firme la presente providencia, por Secretaría **REMITIR** el expediente al Despacho de origen dejando constancia de ello en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Expediente:

Demandante:

Demandado:

Medio de control:

19001 33 33 008 2021 00096 01

MARISELA SOTO Y OTROS

NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Y OTROS

REPARACIÓN DIRECTA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

El Magistrado,

JAIRO RESTREPO CÁCERES

Firma electrónica SAMAI